



Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8**

FLP 68978/2018/56

Buenos Aires, 22 de mayo de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente de falta de acción FLP 68978/2018/56 formado en el marco de la causa FLP 68978/2018 caratulada "R[REDACTED] WALTER EDUARDO Y OTROS S/ INFRACCIÓN ART. 303", del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 8, Secretaría nro. 16;

Y CONSIDERANDO:

I.- La incidencia tiene inicio en virtud de lo ordenado en el marco del expediente principal, mediante auto de fecha 24 de abril del corriente año.

En aquella oportunidad, el tribunal dispuso la formación de este legajo, a raíz de una presentación efectuada por los abogados de Claudio Gabriel S[REDACTED] a través de la cual solicitaban que se intime a la Unidad de Información Financiera, en miras a que se expida sobre su participación en esta causa como acusador particular y protagonista de los recursos en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones y la Cámara Federal de Casación.

Ello, en orden a que, en fecha 16 de abril del corriente año, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto nro. 274/2025 del Poder Ejecutivo Nacional -que acompañaron-, el cual dispuso, entre otras cuestiones, la derogación del Decreto nro. 2226/2008, que facultaba a



#39958577#455577059#20250522120511316

ese organismo a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de delitos tipificados por la ley nro. 25.246.

Luego, se presentó el Dr. Claudio C[REDACTED], en representación de Ivo R[REDACTED], planteando la excepción de falta de legitimación activa para querellar en este proceso de parte de la UIF.

La defensa fundó su postulado con sustento en que, a criterio de esa parte, la reciente sanción del Decreto de mención, el 16 de abril pasado, conlleva a sostener que el organismo carece ya de las facultades suficientes para asumir dicho rol en los procesos penales.

Profundizó al respecto en que, en una de sus partes dispositivas dispone expresamente: “...ARTÍCULO 10.- Derógase el Decreto N° 2226 del 23 de diciembre de 2008...”.

En ese sentido, que esa norma, refrendada por la ex Presidente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, disponía “...Artículo 1º — Autorízase a la titular de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten. La Señora Presidenta de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, podrá encomendar las tareas de seguimiento de las respectivas causas judiciales a profesionales que actúen en el organismo a su cargo...”.

Continuó exponiendo que, si bien con esta sola mención se pondría en evidencia que quedó fuera de vigencia la facultad de la UIF para asumir el rol de parte querellante en los procesos penales en





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8

FLP 68978/2018/56

los que se investiga el delito de lavados de activos de origen ilícito, los considerandos de la nueva norma sancionada permiten advertir con claridad que, en lo que a este aspecto interesa, la autoridad a cargo del Poder Ejecutivo ha decidido un radical cambio de paradigma en cuanto a las funciones y atribuciones del organismo, al cual le reserva gran cantidad de actividades a manera de colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público Fiscal pero, expresamente, le ha extirpado la facultad de asumir el rol de querellante en los procesos en los que se investiga ese tipo de delitos.

Y que a ello no sólo se arriba a partir de la expresa derogación del Decreto nro. 2226/2008 (lo cual sería suficiente para quitarle el respaldo normativo que la facultaba a actuar en el rol indicado), sino que, en los considerandos del Decreto recientemente sancionado, se encarga de explicar los motivos por los cuales así se lo decidió, en lo que a este aspecto concierne.

II.-

A los fines de sustanciar el objeto de la incidencia y en este estado de cosas, se corrió vista del planteo postulado a las partes del proceso, en los términos que establece el art. 340 del CPPN.

De tal manera, se presentaron la Fiscalía Federal interviniente, la Unidad de Información Financiera y algunas de las defensas de los imputados.

a) Postura de la Fiscalía:



#39958577#455577059#20250522120511316

Al respecto, la Dra. M. Paloma Ochoa, titular de la Fiscalía nro. 10 del fuero, dictaminó que, en función del tenor de las circunstancias apuntadas, corresponde que sea la UIF quien se expida respecto de su legitimación para continuar ejerciendo el rol de parte querellante en los actuados.

Asimismo, aludió a que fue este tribunal quien oportunamente tuvo en tal carácter al organismo en este proceso, y que la decisión acerca de su continuidad en ese rol resulta una cuestión de exclusivo resorte jurisdiccional.

b) Postura de la Unidad de Información Financiera:

Se agregó al legajo también, la presentación efectuada por el Dr. Pablo Etcheverry, apoderado de la Unidad de Información Financiera, oportunidad en la que refirió que el art. 6 de la Ley 25.246 dispone que ese organismo será el encargado "...del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal...".

En ese sentido, que el legislador delegó sobre la UIF la función de prevenir e impedir ese delito, encomendándole la preservación del orden económico y financiero, y que dicho injusto penal conforma uno de los que resulta objeto de la presente investigación.

Continuó indicando que como corolario de la obligación impuesta en la norma citada, por medio del Decreto nro. 2226/08, se





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8

FLP 68978/2018/56

facultó a la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos penales que se investiguen los delitos tipificados en aquella Ley 25.246, con la intención de brindarle una herramienta que facilitara el cumplimiento de su función primordial –graficada por el art. 6 citado previamente–, legitimándola a presentarse tanto en esta causa como en otras.

Por otro lado, en lo que hace al rol de parte querellante, destacó que el art. 82 del Código Procesal Penal establece que *“toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte querellante”*.

De esa forma, remarcó que la mencionada norma otorga tal derecho a toda persona que se considere ofendida por la comisión de un delito de acción pública.

Por ello, debe tenerse en cuenta que la actuación del organismo que representa, en las causas en las que es parte querellante, se funda no sólo en la autorización que otorga el Decreto nro. 2226/08, sino también en su función de garante de la protección y correcto funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y del orden económico y financiero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25.246 y en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

Al respecto, que fue en el marco descripto, que esa Unidad se presentó en tal carácter en las causas donde se investigaran los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y que, dentro de todo



#39958577#455577059#20250522120511316

ese universo de causas en las cuales actúa, se encuentra la presente, en la cual ostenta ese carácter, que aún subsiste sin perjuicio de lo dispuesto en el reciente Decreto nro. 274/2025, dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación, que, a través de su artículo 10, deroga el referido nro. 2226/2008.

Señaló luego el Dr. Etcheverry, que, a criterio de esa parte, no parecería haber dudas respecto de lo legislado por esa norma, en lo que respecta a la actuación futura del Organismo y la imposibilidad de asumir nuevas querellas; pero que, lo cierto es que nada dice respecto de aquellas causas en las que la UIF ya se encuentra constituida como parte querellante, así como tampoco efectúa indicación alguna en relación al cese en su actuación en las mismas.

En esa senda, respecto del Decreto nro. 274/2025, expresó que no modifica el temperamento adoptado oportunamente por el Organismo a lo largo de la presente causa, en tanto no establece una prohibición para continuar querellando en aquellos expedientes en los que la UIF ya había asumido ese rol en los términos de los artículos 82 y 83 del CPPN.

Así, que la interpretación que hace la defensa sobre los alcances y finalidad del mentado Decreto afectan gravemente el principio de legalidad y la seguridad jurídica que rigen en los procesos penales. Y que, la aplicación de una norma debe efectuarse sin realizar





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8

FLP 68978/2018/56

interpretaciones contrarias a su espíritu ni que afecten la seguridad jurídica, o que se le otorgue un alcance distinto al que se encuentra plasmado expresamente en su texto.

En el sentido indicado, apuntó a que la letra de la ley constituye la base primordial para su interpretación, por lo que cualquier análisis sobre su validez o alcance debe priorizar este origen, evitando interpretaciones que colisionen con derechos otorgados por otras, y buscando, en cambio, una comprensión que integre y armonice todos sus preceptos.

En lo concerniente a la cuestión que se plantea, refiere el apoderado que, lo que se discute sobre un Decreto que nada indica en relación a las querellas activas del Organismo, como tampoco se expresa respecto de la conducta que debe seguir la UIF con relación a sus obligaciones ya asumidas, aún menos plasma la directiva de desistir de sus actuaciones en curso. Y que, una interpretación que pretenda dicha solución resulta incorrecta y violatoria al principio de interpretación restrictiva de las normas, al mismo tiempo que aplica un temperamento ajeno a la letra del Decreto y afecta la seguridad jurídica en el proceso.

Por otro lado, que el organismo se encuentra legitimado como entidad pública competente en la materia, en tanto directo damnificado de las maniobras investigadas en autos, tal como lo previó el legislador al sancionar la Ley 25.246 que rige el ámbito de su actuación.



#39958577#455577059#20250522120511316

Finalmente y en función de lo reseñado, entendió que debe estarse a la subsistencia de la calidad de querella que reviste la Unidad de Información Financiera en la presente causa, y solicitó el rechazo de la excepción de falta de legitimación presentada.

c) Postura de las defensas:

En oportunidad de contestar la vista conferida en el marco del presente incidente, los Dres. Diego María C. [REDACTED] y Hernán G. [REDACTED], por la defensa de Claudio S. [REDACTED], se remitieron al planteo de falta de acción realizado por el letrado defensor designado por Ivo R. [REDACTED], y refirieron que esa parte comparte en un todo los argumentos allí expuestos.

En tanto, se agregó la presentación efectuada en el legajo por el Dr. Hernán Gustavo T. [REDACTED], abogado defensor de Jonathan R. [REDACTED] F. [REDACTED], quien luego de brindar sus fundamentos normativos y fácticos acerca de la cuestión puesta en debate, y enunciando doctrina, antecedentes jurisprudenciales y citas de derecho comparado, requirió se haga lugar al planteo de falta de legitimación activa interpuesto contra la Unidad de Información Financiera, y se la aparte de su rol como parte querellante, declarando la nulidad de todos los actos procesales posteriores a la entrada en vigencia del Decreto 274/2025.

Por otro lado, obra incorporado el escrito presentado por los Dres. Alejandro B. [REDACTED] y Camila R. [REDACTED], abogados de Ignacio Ricard D. [REDACTED], ocasión en la que manifestaron sus consideraciones en cuanto a que debe hacerse lugar a la excepción planteada y apartar a





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8

FLP 68978/2018/56

la Unidad de Información Financiera de su carácter de querellante en autos.

Ello, en virtud de que, desde la sanción del Decreto nro. 274/2025, de fecha 16 de abril de 2025, la UIF carece de capacidad y facultad para asumir ese rol en un proceso penal.

Apuntaron a que por las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Poder Ejecutivo Nacional suprimió el marco normativo que le permitía actuar en tal sentido.

Y que, la limitación de esta facultad fue expresamente observada y recomendada en el mes de diciembre de 2024, luego de que la Argentina fuera sometida a una evaluación por parte de ese organismo.

En aquella evaluación, se analizaron las medidas antilavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo aplicadas en nuestro país, así como también, el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema de prevención.

En ese sentido, que en el Informe de Evaluación Mutua, el equipo evaluador concluyó que, como acción prioritaria, nuestro país debía reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante en procesos penales, por entender que tal actividad podía afectar su autonomía e independencia operativa.

Destacó asimismo que la facultad que le otorgaba el Decreto nro. 2226/08 a la Unidad de Información Financiera para



#39958577#455577059#20250522120511316

actuar en tal sentido, era un caso anormal y aislado en el mundo, y que se superponía con la actividad propia del Ministerio Público Fiscal, único encargado de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Así pues, solicitaron que se haga lugar a la excepción impetrada y se aparte a la Unidad de Información Financiera de su rol de querellante en esta causa.

Finalmente y con similares argumentos, se presentó -aunque en forma extemporánea- la defensa de Juan Pablo A [REDACTED], adhiriendo a la posición del abogado defensor de Ivo R [REDACTED], a la vez que solicitó el apartamiento de la UIF del rol de querellante en las presentes actuaciones, con efecto retroactivo al 16 de abril próximo pasado.

III.-

Sentado lo actuado y lo esgrimido por las partes, a continuación, corresponderá al tribunal expedirse en torno a la cuestión planteada.

A los fines de emprender el estudio propuesto, habrá de valorarse que, efectivamente, en fecha 16 de abril del corriente año, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto nro. 274/2025.

Y que, a través del mismo, se dispuso, en su artículo 10°, la derogación del Decreto nro. 2226/2008, que facultaba a la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8**

FLP 68978/2018/56

procesos en los que se investigue la comisión de delitos tipificados por la ley nro. 25.246, es decir, aquellos vinculados al Lavado de Activos de origen delictivo.

Es dable advertir entonces que, a partir del dictado del nuevo precepto sancionado por el Poder Ejecutivo, que dispuso dejar sin efecto el Decreto que hasta ese momento tenía vigencia, el fundamento normativo sobre el cual se le brindaba a la Unidad de Información Financiera la facultad de asumir el rol de querellante en todo tipo de procesos penales en los que se investigan presuntas conductas vinculadas al Lavado de Activos, ha perdido su propósito.

Nótese, que el propio espíritu de la Ley nro. 25.246, que dispuso la creación de la Unidad de Información Financiera, apuntó a que el fin del organismo sea el de analizar, en el marco de su competencia, si surgieren elementos de convicción suficientes para establecer la existencia de un hecho, operación u operatoria sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y en caso de determinar que lo hay, comunicarlo al Ministerio Público Fiscal a fin de establecer si corresponde ejercer la acción penal.

Asimismo, que, de la propia letra del Decreto nro. 274/2025, recientemente publicado, se percibe la voluntad de plasmar tales intenciones.

En efecto, señala que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal,



#39958577#455577059#20250522120511316

como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, es el encargado de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

En esa línea, que el esquema hasta entonces vigente ocasionaba una superposición en la actividad de ambos organismos, con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conllevaba, sumado al riesgo de incurrir en contradicciones en su obrar.

Y que, en sintonía con las recomendaciones del GAFI, así como de las normas constitucionales y legales que regulan sus actuaciones, a los fines de dotar al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera de una mayor autonomía, eficacia y eficiencia, en pos de evitar una "Influencia o Interferencia Indevida", se dispuso la derogación del Decreto nro. 2226/08 y, por ende, quitarle la potestad de querellar, conforme los términos que previamente, durante la vigencia del mismo, le fuera conferida.

Lo expuesto conlleva a concluir, en base a lo señalado y a cuánto expresamente surge del Decreto que actualmente rige en torno a la cuestión, que el impulso de la acción resultará resorte exclusivo del Ministerio Público Fiscal. Así también lo entendió el organismo en la presentación que efectuó en estas actuaciones.

En este sentido, el Dr. Etcheverry dejó asentado que ninguna duda cabe respecto de lo legislado, en cuanto a la imposibilidad por parte del organismo, de asumir a partir de entonces nuevas querellas en las causas del fuero criminal.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8

FLP 68978/2018/56

Con este norte, debe ahora establecerse si tal como lo pretende el letrado apoderado, su constitución como tal mientras regía el decreto 2226/08, permite que el organismo pueda seguir ejerciendo los derechos y obligaciones que le fueron otorgados en los términos del art. 82 del CPPN.

En efecto, toda persona jurídica puede constituirse como querellante siempre que tenga capacidad civil, interés legítimo y legitimación legal para intervenir en los procesos.

Precisamente, la naturaleza de la figura en trato, en tanto le permite al particular ofendido constituido en parte querellante, impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir lo que se entienda corresponda, exige que la legitimidad de tal carácter se verifique durante todo el desarrollo de la causa.

Y, tal como se expuso párrafos arriba, más allá del interés legítimo que el organismo pueda presentar con su actuación en estos autos teniendo en cuenta el objeto procesal que se persigue, debe también encontrarse legalmente legitimada su actuación para ejercer la acción en los términos que establece el art. 82 del CPPN.

Partiendo de esta premisa, el nuevo escenario que ahora se plantea a partir de los reclamos efectuados por algunas de las partes imputadas, requiere que tal condición sea revisada.

En esa línea, si bien, al momento de la constitución como parte querellante de la Unidad de Información Financiera, el tribunal consideró que el organismo contaba con legitimación procesal



#39958577#455577059#20250522120511316

conforme a la normativa entonces imperante, la cual le otorgaba expresamente facultades para actuar en el marco de procesos en los que se investigue la comisión de delitos vinculados al Lavado de Activos de origen delictivo; lo cierto es que, con la sanción y entrada en vigencia del Decreto nro. 274/2025, se ha materializado una modificación sustancial en el marco jurídico aplicable, suprimiéndose las disposiciones que la habilitaban a intervenir en tal carácter.

Así, en función del aludido cambio normativo, reevaluando el rol detentado por el organismo en la presente causa, se sigue que la legitimación procesal no sólo constituye un requisito de admisibilidad en el momento de iniciación de su actuación, sino que debe mantenerse durante todo el desarrollo del proceso.

En función de lo expuesto, la sanción y publicación de la nueva normativa por parte del Poder Ejecutivo Nacional conllevará, entonces, a la pérdida sobreviniente de la facultad que antes poseía, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado durante la vigencia del Decreto nro. 2226/2008, a la postre derogado.

Finalmente, y en relación a cuánto aquí habrá de resolverse, sus efectos deberán computarse a partir de la entrada en vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 274/2025, es decir, desde el 16 de abril del corriente año.

De esta forma, en base a las consideraciones desarrolladas, y de acuerdo con la normativa vigente;

SE RESUELVE:





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL 8**

FLP 68978/2018/56

HACER LUGAR a la excepción de falta de acción articulada y, en consecuencia, APARTAR a la Unidad de Información Financiera del rol de parte querellante asumido en el presente expediente FLP 68978/2018, así como en la causa CFP 3611/2023, que tramita en forma conexa con estos actuados, con efectos a partir del 16 de abril del corriente año, fecha de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro. 274/2025.

Tómese razón, notifíquese a las partes mediante cédulas electrónicas y comuníquese mediante Deo a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a los fines pertinentes.

Ante mí:

Se cumple con lo ordenado. Conste.



#39958577#455577059#20250522120511316